



Información Migratoria Nacional

México y Colombia abren mesa de diálogo sobre migración



México y Colombia abrieron una mesa de diálogo en materia migratoria, con el propósito de aumentar el intercambio de información y generar políticas públicas en favor de las personas en situación de movilidad.

Acorde con estadísticas de la Secretaría de Gobernación, si bien el tránsito de colombianos a México no es preponderante, respecto a la población procedente de centroamérica, por ejemplo, hay un flujo constante regular e irregular.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, y el embajador de Colombia en México, Alvaro Moisés Ninco Daza, sostuvieron una reunión de trabajo para atender el tema, reportó el INM en un comunicado de prensa.

Analizaron la necesidad de tener información oportuna, un pre registro de visitantes y conocer en tiempo real cifras del flujo de personas irregular.

Además, dar seguimiento a la nueva ruta aérea que iniciará operaciones directas de Bogotá a Monterrey.

El embajador dijo que se abre una nueva etapa de entendimiento entre ambas naciones para impulsar medidas en favor de los migrantes, y “políticas más justas y humanitarias para caminar por la senda de la paz y la justicia”.



El comisionado Garduño mencionó los beneficios de tener una agenda de trabajo conjunta, de entendimiento bilateral y de diálogo permanente.

Subrayó la disposición del INM para visitar las instalaciones del organismo en los aeropuertos y estaciones migratorias “para constatar las condiciones de asistencia digna” a las personas. ([La Jornada](#), [El Universal](#), [Vanguardia](#), [Diario Tijuana](#), [El Arsenal](#), [Uno más Uno](#))

EU y México deportaron a 50,236 migrantes centroamericanos entre enero y abril



Un total de 50,236 migrantes irregulares salvadoreños, hondureños y guatemaltecos fueron deportados principalmente de EU y México durante el primer cuatrimestre del año, un 27.8 % menos que en 2022, según informó este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La fuente, que retoma datos gubernamentales de cada país, indica que en los primeros cuatro meses de 2023 se registraron 19,382 casos menos que los 69,618 retornos registrados en los mismos meses de 2022.

Las repatriaciones a la zona conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica en ese periodo fueron de 3,225 casos a El Salvador, mientras a Honduras llegaron 18,975 y 28,036 a Guatemala.

Del total de retornos a estos tres países, 26,622 fueron desde EU, 23,391 de México y 223 de otros países no especificados.

Las cifras divulgadas por la OIM indican que Guatemala registró una reducción del 12.5 % de sus ciudadanos repatriados, para El Salvador la bajada fue del 36 % y del 41,7 % para Honduras.



LABOR POR LA MIGRACIÓN

Los datos presentados por la OIM son recopilados de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador; el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de Guatemala; y el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho).

Con respaldo de la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones es el principal organismo intergubernamental en el ámbito de la migración y fue fundada en 1951.

Su objetivo principal es asegurar la cooperación efectiva entre los Estados en cuestiones migratorias, así como promover la comprensión de la migración y fomentar un enfoque humano en el trato de los migrantes.

La OIM juega un papel crucial en la promoción de una gestión humana y ordenada de la migración en todo el mundo. Su enfoque se basa en la protección de los derechos humanos de los migrantes, la asistencia en situaciones de crisis y la promoción de la migración segura y ordenada. *(EFE, La Crónica, P.p.)*

Políticas migratorias de EU crean cuello de botella en la frontera sur



Las nuevas políticas instauradas por el Gobierno de Joe Biden en la frontera sur de Estados Unidos han reducido el número de arrestos y forzado a ciertos de migrantes a esperar en el lado mexicano, creando un “cuello de botella” que, a ojos de expertos, no es sostenible.

Un mes después del 11 de mayo, cuando se dio fin al polémico Título 42, una norma que permitía las devoluciones en caliente en la frontera, el Gobierno de Biden señala como un logro la reducción en la cantidad de personas que son arrestadas cruzando la frontera de manera irregular.



Y es que las detenciones tuvieron una caída significativa: entre el 12 de mayo y el 2 de junio, las autoridades reportaron un promedio de 3,700 arrestos en la frontera sur, en comparación con las aproximadamente 7,000 detenciones al día que se vieron en el mes de mayo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Esto puede explicarse porque el gobierno impuso mayores restricciones y penalizaciones para quienes decidan cruzar la frontera de manera irregular.

Entre ellos, está la deportación a sus países o a México de quienes no cumplan con una serie de requisitos más estrictos para poder solicitar asilo, que incluye haber pedido protección en un tercer país y estar en circunstancias de alto riesgo.

Así, en este último mes, el Gobierno ha llevado o deportado a más de 38,000 personas, a unos 80 países, incluyendo México, que aceptó también recibir a venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.

“Las políticas están funcionando en la medida en la que más personas están esperando, pero eso sucede a costa del sufrimiento de quienes esperan del lado mexicano”, dijo Yael Schacher, directora para las Américas de Refugees International. (*Redacción, La Crónica, Nacional, p. 6*)

Información Migratoria de los Estados

Ciudad de México

Pocos migrantes en la Plaza Giordano Bruno





Aún quedan pocos migrantes alrededor de la Plaza Giordano Bruno en la alcaldía Cuauhtémoc, quienes buscan poder concluir su permiso para quedarse en la Ciudad de México y poder conseguir una mejor vida.

Son cerca de cien migrantes haitianos en su mayoría que se encuentran “regados” y que se negaron a irse a uno de los dos refugios ubicados en la Ciudad de México.

La Plaza Giordano Bruno se encuentra “limpia” después de que fueron retirados los migrantes y enviados a Chiapas algunos y otros ubicados en algún refugio.

Los migrantes que se encuentran ahí tratan de continuar su camino hacia la frontera norte, en busca de llegar a los Estados Unidos.

Muy cerca de ahí se encuentra la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados (Comar), donde los migrantes esperan concluir sus trámites para poderse quedar aquí en México y poder trabajar y conseguir una mejor vida.

Los pocos migrantes haitianos que se encuentran ahí preparan sus alimentos en un anafre con poca limpieza en el lugar, pero aun así con las carencias sobreviven.

William, un haitiano con su español apenas entendible, dice que vivir así es muy lamentable, pero tienen que resistir para tener una mejor vida, para él y su familia.

“No podemos seguir así, tenemos que solucionar este problema y poder conseguir un permiso que nos permita poder estar aquí y conseguir un trabajo para poder comer mejor y conseguir un hotel económico para dormir mejor”. ([Aurelio Sánchez, La Prensa, Metrópoli, p. 10](#))



Información Migratoria Internacional

Costa Rica

Vulneran en AL derechos de los migrantes a la salud



San José.— Sin dinero para pagar un taxi o alquilar un transporte que la lleve al hospital más cercano y sin teléfono celular ni señal de telecomunicaciones para pedir ayuda, la indígena taurepang o pemón venezolana Katuska Fernández sabe que cuando le llegue el momento de parir, deberá hacerlo en su refugio de una remota aldea de Brasil fronteriza con Venezuela.

Pese al drama que se le aproxima, Katuska, de 31 años, también sabe que podrá contar con el apoyo de mujeres y hombres brasileños de su misma etnia que la acogieron, con su hijo, de ocho años, y de otros tres parientes —los cuatro venezolanos— desde que la familia migró a la fuerza en 2018 a Brasil para escapar de la inseguridad y la escasez de medicinas y alimentos en Venezuela.

Katuska aguarda la hora del parto para estos días de junio en Sakao Motá, una comunidad del norteño estado brasileño de Roraima y en la zona adyacente a Venezuela.

“Si no puedo conseguir medio de transporte hasta el hospital más cercano, mi bebé deberá nacer en casa en la comunidad, como ya ha ocurrido con todos mis ancestros”, anticipó la joven venezolana.



En un testimonio que rindió en ese sitio a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una instancia asociada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó que “el hospital más cercano está a una hora de distancia en coche desde aquí y no tenemos dinero como para pagar un taxi o algún otro medio de transporte”.

Más allá de sus circunstancias, la mujer aclaró que “estoy muy feliz de que todo esté bien. Estos cuidados de la salud nos han cambiado la vida”.

Katuska confía en la solidaridad comunitaria.

“Hoy son ellos, pero mañana podríamos ser nosotros”, aclaró el indígena taurepang o pemón brasileño Silvano Fernández, de 55, al recordar la recepción a los migrantes venezolanos tras calificarlos como “hermanos y hermanas”. “Son nuestros parientes. Debemos darles la bienvenida porque son nuestra gente”, añadió.

Katuska recibió un control regular de maternidad y de cuidados prenatales en un aula de una escuela de Sakao Motá que ofreció la OIM en marzo anterior con Unidades Sanitarias Móviles para suministrar asistencia médica a los migrantes venezolanos y a las comunidades de acogida en lo que fue descrito por la organización como una de las zonas “de más difícil acceso” en Brasil.

Una mayoría de los aproximadamente 400 mil venezolanos que residen en Brasil utilizaron a Roraima como puerta para entrar y establecerse en ese país. La OIM reportó que las poblaciones de brasileños y venezolanos que viven en las zonas limítrofes y adjuntas sufren las más diferentes dolencias crónicas, como hipertensión, diabetes, malnutrición infantil, micosis en la piel, parásitos y enfermedades de transmisión sexual y carecen de acceso a centros de salud.

Bajo este panorama, la joven encinta se convirtió en uno más de los múltiples dilemas de inquietud de la crisis migratoria que azota a América por el coctel explosivo de la mezcla de salud y migrantes irregulares americanos, asiáticos y africanos.

El conflicto se agudizó en el siglo XXI con millones de personas que, sin visas, viajan del sur al norte del continente americano por vía aérea, marítima, fluvial y terrestre para tratar de llegar a México e ingresar a EU.

Las corrientes migratorias, por ejemplo, también son regionales. Más de 7 millones 200 mil venezolanos migraron de Venezuela al menos desde 2014 para huir de las hondas complicaciones socioeconómicas, políticas e institucionales de esa nación.



Decenas de miles de nicaragüenses migraron a Estados Unidos luego de que, en 2018, Nicaragua se precipitó a una de las más severas conmociones políticas desde el fin de su guerra civil en 1990. Nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños migraron a Guatemala, El Salvador, Honduras y México y a EU.

El éxodo de cubanos y de haitianos de sus países —también por sacudidas políticas y socioeconómicas— llegó en esta centuria a EU y México e igualmente se asentó en Centroamérica y en América del Sur.

Acorralados por la falta de opciones productivas y de educación, salud, vivienda y empleo, los colombianos engrosaron las avalanchas con mayor presencia a partir de 2019, en oleadas a las que se unieron ecuatorianos, peruanos, dominicanos y otros latinoamericanos y caribeños con africanos y asiáticos para atizar los problemas en numerosos trillos fronterizos y quedarse a residir en los países de paso.

Así creció la demanda de servicios de salud.

Al recordar que “todas las personas migrantes tienen derecho a recibir atención médica y cuidado de la salud”, el periodista colombiano Jorge Andrés Gallo, oficial regional de comunicaciones de la OIM para Centroamérica, América del Norte y el Caribe, afirmó que persisten las dificultades.

“Millones de personas migrantes en condición vulnerable, especialmente mujeres, niños y niñas en situación irregular, enfrentan barreras que les impiden acceder a los servicios de salud disponibles, incluidos obstáculos legales, financieros, administrativos, lingüísticos y discriminatorios”, expuso Gallo a EL UNIVERSAL.

“El acceso a la salud para personas migrantes también es importante desde la perspectiva de la salud pública. Al proporcionarles acceso a la atención primaria de salud y a los tratamientos tempranos, podemos prevenir costos elevados para el sistema de salud y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades”, subrayó.

Al mencionar que la pandemia del Covid-19, de 2020 a 2023, fue “un claro ejemplo de que la salud de todos está interconectada”, explicó que “la prevención y el tratamiento deben estar al alcance de todos para superar una emergencia sanitaria pública”.



“Excluir a las personas migrantes de la atención en salud está en el origen del perjudicial mito según el cual las personas migrantes traen enfermedades. La realidad es que, lejos de traer enfermedades, la exclusión de estas personas hace que se enfermen, lo cual pone en riesgo a toda la comunidad”, recalcó.

Tras advertir que ese tipo de actitud “es un ejemplo claro de cómo la discriminación perjudica a todos en la comunidad, ya sean locales o migrantes”, planteó que “una buena salud es un requisito fundamental para que las personas migrantes puedan estudiar, trabajar y contribuir al desarrollo de sus comunidades de acogida y origen.

“La salud adecuada les permite desempeñarse de manera óptima en diferentes aspectos de sus vidas, fortaleciendo así tejido social y económico de las sociedades. En conclusión, es necesario garantizar el derecho a la atención médica de todas las personas migrantes, especialmente de aquellas en situación vulnerable”, agregó.

“El acceso a servicios de salud adecuados no sólo beneficia a las personas migrantes individualmente, sino que también contribuye al bienestar general y al desarrollo de las comunidades en las que reside”, puntualizó.

Ante una realidad que mostró las urgencias generales en salubridad para los migrantes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó en mayo del año anterior una Plataforma informática sobre salud y migración en las Américas, y alertó del ritmo creciente del número de migrantes irregulares en América Latina y el Caribe, que se duplicó desde 2005 y llegó a unos 15 millones en 2022.

“Esta gente viene enferma”, relató la hondureña Karla Rivas, coordinadora de la (no estatal) Red Jesuita con Migrantes Centroamérica, de Honduras.

“No sólo necesita atención física, medicamentos, sino por su salud mental con los traumas y todo lo que han vivido en el camino. De no ser por la asistencia humanitaria de las casas de albergue y los puntos de control, el acceso a la salud es un derecho que está vulnerado para las personas que están en tránsito”, aseguó Rivas a este diario.

“Es un derecho de salud... violentado. Estos migrantes están transitando por países que no han tenido la capacidad de darles la primaria en salud ni primaria ni especializada a sus propios habitantes. El déficit de atención en salud para los propios pobladores [de esos países] se suma a las necesidades de atención para los migrantes en tránsito”, advirtió.



“Los sistemas de salud [de América Latina y el Caribe] van a la privatización, con lo que el derecho humano a la salud prácticamente sólo se lo pueden permitir aquellos que tienen dinero”, denunció.

Así lo sabe también Katuska: deberá parir en su hogar de refugio en Brasil... sin atención privada ni pública y solamente con el auxilio de su etnia indígena, empobrecida y lejana. ([José Meléndez, El Universal, Mundo, p. A19](#))

Estados Unidos

Son migrantes los más golpeados en California por el cambio climático



Fresno y Los Ángeles., Podría ser un cuento en la Biblia: el año pasado en este jardín del Edén, en el corazón agrario de California, la sequía fue tan extrema que los pozos al norte de Fresno se secaron y miles de hogares tuvieron que depender de agua embotellada. La secretaria del Interior, Deb Haaland, visitó la región y declaró que el estiaje era una amenaza existencial a nuestras comunidades y la forma en que vivimos.

Después, al inicio de este 2023, lluvias sin precedente causaron que esos ríos secos inundaran la región –en el pueblo de Planada, cerca de Fresno, la mitad de las casas resultaron destruidas–. Viviendas improvisadas ante la referida emergencia aún son visibles entre los árboles de frutas y las tierras de cultivo irrigadas.



El agua es la fuente de vida de esta comunidad, el líquido precioso que literalmente corre por ríos y canales a través del centro de cada pueblo y comunidad para hacer posible el trabajo agrícola, que produce una cuarta parte de todo el alimento consumido en Estados Unidos.

Pero manejar el agua es cada vez más difícil. Los efectos extremos de los fenómenos meteorológicos resultan en un desfile de funcionarios públicos prometiéndole millones de dólares en asistencia que benefician a granjeros, políticos y empresarios, pero la mayoría de los trabajadores que cultivan y cosechan la tierra enfrentan un futuro cada vez más inseguro ya que son migrantes irregulares, muchos de ellos de los estados del Bajío mexicano (Michoacán, Jalisco Guanajuato), Zacatecas y Oaxaca.

En mayo, el Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California en Merced publicó un informe en el que subrayó que, en el pueblo más afectado por las inundaciones, la mayoría de los trabajadores eran indocumentados y, por lo tanto, sin derecho a la asistencia pública. Un residente, Samuel Gómez, comentó al rotativo The Guardian: “No sé si podemos decir que fuimos olvidados... a nosotros nunca nos han contado”.

Migrantes sin papeles dicen que ni fueron alertados por las autoridades sobre la inminencia de las anegaciones.

Sin duda, como siempre pasa, los residentes del valle que han sido más golpeados, damnificados, desplazados por la sequía, primero, y ahora por las inundaciones, son los pobres del campo, las familias migrantes que no tienen papeles, explicó Samuel Orozco, director de noticias de Radio Bilingüe, quien ha vivido en este estado los 40 años pasados. Agregó, en entrevista con La Jornada, que están privados por ley de la ayuda federal para desastres, y aunque pudieran tener acceso a servicios o apoyos estatales y locales, muchos se abstienen de pedirla por temor a meterse en líos, a ser considerados carga pública, o simplemente porque no saben cómo navegar en el mar de requisitos del sistema.

El Valle Central, de unos 724 kilómetros de largo por 80 kilómetros de ancho, ocupa uno por ciento de toda la tierra agraria de Estados Unidos, pero produce 25 por ciento de los alimentos del campo que abastecen al país. Donde fluye agua, se cultiva almendra, uvas, fresas y aguacate, pero donde no, la tierra seca es tan dura como piedra. Y aunque la comunidad ha padecido extremos de sequía e inundaciones, los indicadores son que el agua está desapareciendo de esta región.



Tenemos una crisis plena, afirmó Jay Famiglietti, profesor de hidrología y director ejecutivo del Instituto Global de Seguridad del Agua, en una entrevista con el rotativo Los Ángeles Times en diciembre. “El agua subterránea de California y la que circula desde el suroeste de Estados Unidos está desapareciendo mucho más rápido de lo que se imagina la gente... La trayectoria en que estamos hoy es una en donde desaparecerá el 100 por ciento”.

California ha promulgado una serie de leyes y ha establecido comisiones para manejar el uso de los recursos hídricos, pero la demanda de granjeros por más presas también está presionando al gobierno. Construyan más presas, hagan grande a California otra vez, dice un anuncio que se repite en las rutas viales del valle, eco de la consigna de Donald Trump.

Un estudio publicado este año por el Public Policy Institute de California concluyó que en los próximos 17 años, casi 364 mil hectáreas de tierras agrarias podrían perderse junto con 50 mil empleos en el campo, ocupados en su mayoría por migrantes, sobre todo mexicanos, quienes ya han tenido que abandonar sus tierras de origen una vez, y ahora podrían tener que mudarse de nuevo para buscar nuevos empleos y establecer nuevas comunidades para sus familias. [\(Jim Cason y David Brooks / II, La Jornada, Cp.\)](#)



Seguridad

Texas declara como terroristas a cárteles mexicanos; endurece seguridad fronteriza



El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha promulgado un paquete de leyes de seguridad fronteriza con el objetivo de frenar la llegada de inmigrantes y el tráfico de drogas. En un esfuerzo por fortalecer la seguridad en la frontera, Abbott anunció la implementación de una "nueva barrera de boyas" en el río Grande.

El paquete de leyes consta de seis medidas, una de las cuales amplía la autoridad de los agentes de la Patrulla Fronteriza de EU para registrar y arrestar a sospechosos de delitos graves, según lo establecido por la ley de Texas, en los puntos de control fronterizo. Otra medida autoriza el uso de aeronaves no tripuladas por parte de las fuerzas militares de Texas para vigilar la frontera con México.

Aumentan penas para narcos

Además, estas leyes designan a los grupos criminales y cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras en el estado de Texas, y aumentan las penas estatales para los delitos cometidos por estas agrupaciones. El paquete legislativo también permite al gobernador de Texas coordinar y ejecutar acuerdos con otros estados para reforzar la seguridad fronteriza sin requerir la aprobación del Congreso de Estados Unidos.



En una conferencia de prensa, Abbott afirmó que estas leyes se han promulgado "para garantizar que Texas pueda hacer aún más para detener la inmigración ilegal" y proporcionar nuevas herramientas "para proteger a los texanos y estadounidenses del caos y la crisis en la frontera". Desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en 2021, Abbott ha criticado a la Administración demócrata por lo que considera una política de "puertas abiertas en la frontera" que ha generado una crisis sin precedentes.

Como parte de estas medidas, Abbott también anunció la instalación de barreras flotantes en puntos estratégicos a lo largo del río Grande (conocido como río Bravo en México) para prevenir los cruces ilegales. Estas boyas, que se desplegarán inicialmente cerca de Eagle Pass, en el condado de Maverick, permitirán evitar que las personas lleguen a la frontera, según explicó Abbott.

El gobernador de Texas espera que el Senado estatal apruebe otro paquete de leyes relacionadas con la inmigración y la seguridad fronteriza. Una de las propuestas principales, que buscaba imponer una sentencia de cárcel obligatoria de al menos 10 años para cualquier persona atrapada traficando inmigrantes ilegales en Texas, fue rechazada en la Cámara Baja del estado.

[\(Alan Rodríguez, La Crónica, P.p.\)](#)